



Instituciones,  
ciudadanía  
y sociedad civil

# ¿Qué hemos aprendido o desaprendido en estos cuarenta años?

LUIS GÓMEZ CALCAÑO

---

## Mirando los orígenes

Cuando los líderes de los partidos políticos regresaban del exilio en 1958, bajo la aparente unanimidad democrática del discurso oficial, se expresaban otros discursos paralelos: aquellos que presagiaban tiempos de conflictos sociales y políticos semejantes a los del trienio 1945-48, incluyendo un temprano final para el ensayo de democracia bajo

el impacto de nuevas intervenciones militares. El regreso de los actores del trienio hacía temer la repetición de un ciclo de enfrentamientos entre fuerzas con pretensiones de hegemonía, incapaces de conciliar sus intereses.

Sin embargo, tanto los líderes como la sociedad misma, parecieron haber aprendido algunas lecciones de los conflictivos años del trienio. Podría decirse que el costo del aprendizaje había sido alto: aunque el régimen surgido del 18 de octubre había sido un hito importante como reconocimiento e incorporación de los sectores populares a la vida política, había estado lejos de cumplir sus ofertas de redención económica y social de los más pobres, y sus logros habían sido obtenidos a costa de enfrentamientos con diversos grupos de poder. La imposibilidad de conciliación entre AD y el estamento militar, socios del golpe de octubre, así como la imagen de sectarismo e intransigencia del primero, contribuyeron a la implantación de una dictadura institucional que luego se convirtió en personal. En el juego de los enfrentamientos habían perdido todos, pero especialmente los sectores populares a los que se pretendía representar.

La idea de compartir el poder para conservarlo, obstaculizada en años anteriores por la profunda desconfianza entre los actores, se abrió paso contra las resistencias y temores de cada bando. Tanto los partidos políticos como los gremios y las mismas Fuerzas Armadas vivieron debates y divisiones ante el dilema de aceptar o no compartir el poder con los antiguos adversarios. Se impuso la vía de la conciliación, sustituyendo los deseos de cumplir con prontitud el programa del propio partido o sector por su aplicación gradualista, por medio de la negociación entre los grupos de poder. En términos estratégicos, se sustituyó la "guerra de movimientos" por una "guerra de posiciones", caracterizada por la ocupación de espacios institucionales que permitieran promover los intereses de los diferentes grupos sociales, sin que cada uno se sintiera amenazado por los otros, ya que no se trataba de obtener victorias definitivas ni la eliminación del adversario.

Uno de los factores centrales en la posibilidad de fundar este entendimiento, que dio lugar a los grandes pactos constitutivos del sistema político venezolano, fue el acercamiento entre las

élites políticas, económicas y militares que antes se habían enfrentado. Es precisamente entre élites que se acuerdan los pactos y este carácter marcará con un sello de identidad profunda todo el período democrático. Si bien las políticas económicas y sociales del régimen lograron durante los primeros veinte años grados significativos de incorporación de los sectores populares al empleo, a los servicios sociales y a la educación, dicha incorporación fue otorgada por el Estado más que conquistada por esos mismos sectores. La retórica revolucionaria del trienio, que situaba al pueblo simbólicamente como eje y ocupante central del poder, fue suavizada para acomodar a la multiplicidad de actores que ahora tenían derecho de ser consultados e incluso, implícitamente, de vetar las políticas públicas que afectarían sus intereses, aunque ellas obedecieran a los programas y promesas de los partidos mayoritarios. La soberanía popular, representada en el voto, encontraba sus límites en la defensa de la estabilidad y la supresión del conflicto.

El éxito de esta transición pacífica hacia la democracia no debe hacer olvidar que sí se produjeron fuertes conflictos políticos y sociales en el inicio del régimen, conflictos movilizados principalmente por aquellos sectores, tanto conservadores como revolucionarios, que se opusieron a la vía de conciliación trazada por las élites. Pero el aprendizaje político, cristalizado en los pactos dio un margen de confianza a dichas élites para enfrentar los desafíos y contribuyó a cohesionar a los aliados.

Fue precisamente el margen de confianza otorgado por los sectores populares a los líderes partidistas el principal factor atenuado del conflicto socio-político, ya que las aspiraciones de reivindicación social fueron canalizadas por la vía del clientelismo partidista, los subsidios directos e indirectos y la ampliación del empleo público. Las organizaciones gremiales y sindicales subordinaron las tácticas de cada lucha o reivindicación específica a la estrategia a largo plazo de los partidos. En cierta forma, este tipo de acción fue una forma de modernización política; en lugar de actuar como grupos aislados, movidos por sus solos intereses particulares, los trabajadores se enmarcaban en un proyecto de sociedad que incluía a otros sectores, donde la fuerza combinada de gremios y partidos podía incli-

nar la balanza hacia una redistribución progresiva de la riqueza. Este modelo socialdemócrata sirvió como justificación para los numerosos mecanismos de mediación y conciliación de intereses, y durante algún tiempo, reforzado por el ingreso petrolero, pudo dar frutos concretos para los trabajadores integrados a los sectores modernos de la economía.

Pero, independientemente de sus logros materiales, este modelo de relación entre Estado, partidos y sociedad institucionalizó la dependencia de los actores sociales hacia los aparatos partidistas y más específicamente, hacia el líder clientelista que cumplía el papel de intermediario entre las bases y aquellos aparatos. Es cierto que el clientelismo no fue creado por los partidos, sino que es un rasgo muy arraigado en nuestra cultura política, como expresión de acentuados rasgos particularistas que operan en todas las instituciones públicas y privadas. Ante el actual rechazo a los partidos políticos, pareciera que éstos se hubieran impuesto sólo a través de la coerción y el engaño durante los "cuarenta años perdidos". Sin negar que ambos mecanismos también fueron usados, sería incomprensible la duradera hegemonía de la élite política del 58 sin algún grado de aceptación o, si se quiere, "complicidad", de la población con los mecanismos de cooptación y clientela.

¿Significa esto que el "pueblo" ha sido tan corrupto como las élites y por lo tanto los nuevos actores políticos no tienen más remedio que repetir el viejo modelo? ¿Será entonces que no se ha producido un aprendizaje social o, peor aún, que se ha producido un "aprendizaje perverso" de una forma de ciudadanía dependiente y delegativa?

### ¿Repitiendo el pasado?

Muchos indicios pueden llevarnos a una conclusión pesimista de ese tipo. En primer lugar, el actual proceso de cambio político está cargado de una profunda identificación mesiánica con el líder carismático, poniendo todo el peso de la balanza en una persona y desconfiando de las instituciones. Este hecho no es sólo atribuible a la personalidad del líder, sino a la pérdida de sentido, al vaciamiento de contenido de casi todas las instituciones que formaban el esqueleto de nuestra vida política. El

creciente hiato entre un discurso del respeto a la norma y prácticas arbitrarias o corruptas terminó por hacer perder credibilidad a las instituciones centrales del orden democrático: Presidencia, Congreso, poder judicial, sistema electoral, fueron desacreditadas en forma escandalosa por sus propios titulares, hasta convertirlas en sinónimo de corrupción. Por ello, no puede extrañar la indiferencia con la que hoy en día son recibidos los actos de la Asamblea Constituyente, que van despojando de sus atribuciones a los poderes legislativo y judicial; la voluntad de castigo se impone sobre la valoración de la continuidad de las instituciones. En la misma dirección van las afirmaciones del propio Presidente y de sus partidarios, en el sentido de legitimar tanto su intento anterior de golpe de Estado como la posibilidad de una medida de fuerza en caso de encontrar resistencia en las élites tradicionales para sus proyectos de transformación.

Otro indicio del arraigo de una cultura clientelista y dependiente es destacado y aparentemente estimulado por el mismo Presidente en sus programas de radio y televisión. La mayor parte de las intervenciones en los mismos consisten en demandas muy específicas de empleo o ayuda económica, que los favorecidos creen garantizadas por el solo hecho de haber alcanzado el contacto con el centro del poder. El carácter estrictamente individual de estas demandas las asemeja a una especie de lotería, exacerbando los rasgos del clientelismo más particularista, con el agravante de no dirigirse a una organización sino a un individuo.

Un tercer rasgo que muestra la debilidad institucional es la inexistencia, de hecho, de partidos modernos en Venezuela. Paradójicamente, Acción Democrática y COPEI, que nacieron con el objetivo explícito de modernizar al país (y en buena medida lo lograron desde el punto de vista material), terminaron por convertirse en sinónimo del atraso y la resistencia al cambio. Es por ello que su debacle, aunque aparentemente súbita y sorpresiva, era inevitable desde hacía tiempo atrás: habían logrado manipular todos los mecanismos formales que debían garantizar un manejo democrático de la organización para producir un altísimo grado de concentración del poder, excluyendo deliberadamente a los actores internos de relevo.

Los actores de la coalición mayoritaria, por su parte, son encabezados por un partido de gran heterogeneidad interna, cuyo cemento cohesionador no se encuentra en una ideología común o un programa preciso, sino en la fidelidad al líder carismático. En sus cortos años de existencia, el MVR no ha logrado consolidarse como una fuerza política coherente, lo cual presagia posibles divisiones una vez que el gobierno vaya enfrentando los dilemas de la política económica y social. Y sus dos aliados han sufrido el impacto de la coexistencia con una fuerza política avasalladora, hasta el punto de deber su presencia en la Asamblea Constituyente exclusivamente a la voluntad del caudillo, por la vía de la inclusión en las "llaves de Chávez".

Pareciera, entonces, que sólo quedarán actores institucionales o corporativos, como las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los gremios empresariales y los medios de comunicación, como actores dotados de cierta consistencia y autonomía, capaces de reconstruir una institucionalidad arrinconada por su propio desprestigio y por la dinámica de la identificación personalista entre las masas y el caudillo.

---

### ¿Dónde queda la Sociedad Civil?

Quizás extrañe al lector que no hayamos mencionado hasta ahora a la "sociedad civil", invocada en muchos discursos bien intencionados como árbitro entre las fracciones enfrentadas, o como actor destinado a llenar el vacío de representación que han dejado los partidos. No se trata de desconocer la existencia de una miríada de organizaciones autónomas en diversos niveles de la acción social, ni mucho menos de unirse a un cierto discurso que le atribuye un "fracaso electoral" en el proceso constituyente. De lo que se trata es que es mucho más peligroso para la misma sociedad civil mitificarla que desconocerla. Por "mitificación" entendemos una operación que le atribuye una unidad esencial y tareas históricas, como si fuera un ente unitario cuyo papel histórico estuviera señalado *a priori*.

En realidad, si algo caracteriza a la sociedad civil en el mundo actual es su diversidad; de hecho, si comprendemos el concepto como el conjunto de ciudadanos organizados con fines públi-

cos o privados, dichos fines pueden enfrentarse a unas organizaciones contra otras o dar lugar a alianzas heterogéneas e inestables; por lo demás, nada garantiza que todas las organizaciones de la sociedad civil sean necesariamente democráticas y modernizadoras. Si bien algunas organizaciones pueden ser escuelas de ciudadanía democrática y agentes de reformas políticas y sociales, otras pueden dedicarse a fines estrictamente particularistas. Así como la estructura partido político no garantiza en sí misma una determinada orientación, las organizaciones de la sociedad civil pueden obedecer a los fines más variados.

Es por ello que sería un error suponer que la construcción de institucionalidad que se da en el seno de la sociedad civil deba ser necesariamente el modelo para la reconstrucción de los partidos políticos y del Estado; si bien es cierto que se puede aprender mucho de las nuevas organizaciones que funcionan en red, con énfasis en la comunicación directa y con estructuras horizontales, quienes quieran reconstruir las instituciones políticas en Venezuela no pueden ahorrarse el trabajo de pensar en términos de acceso al poder, de comunicación política y de programas estratégicos para el desarrollo nacional. El rol de las organizaciones autónomas de la sociedad civil ha sido más bien el de influenciar la cultura política general con sus demandas de más apertura y participación de los ciudadanos en las decisiones, y sobre todo con la demostración de la viabilidad de la autoorganización ciudadana. Es cierto que la coyuntura actual privilegia el momento político, más aún, que es necesaria la constitución de nuevos actores e instituciones políticas. Sin embargo, la lenta y todavía incipiente construcción de redes sociales que se convierten en referencias cotidianas para los ciudadanos puede ser un escenario, alejado de las urgencias de la lucha política cotidiana, en el cual se experimente con nuevas formas de convivencia y organización.

---

**LUIS GÓMEZ CALCAÑO**  
Investigador del CENDES